

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe © CERLALC, 2012
Selección y disposición de las materias y comentarios, Ricardo Antequera Parilli

Entidades de gestión colectiva. Legitimación. Presunción “*iuris tantum*”. Repertorio extranjero. Información a los usuarios.

PAÍS U ORGANIZACIÓN: Perú

ORGANISMO: Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de INDECOPI

FECHA: 12-8-2009

JURISDICCIÓN: Administrativa

FUENTE: Texto digitalizado de la Resolución, cortesía del INDECOPI.

OTROS DATOS: Resolución 2047-2009/TPI-INDECOPI

SUMARIO:

“... cabe precisar que el artículo 49 de la Decisión 351 [de la Comunidad Andina] señala que las sociedades de gestión colectiva están legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos y de los contratos que celebren con entidades extranjeras, para ejercer los derechos confiados a su administración y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales. Este artículo recoge una presunción a favor de las sociedades de gestión colectiva a fin de facilitar su labor de defensa de los derechos de los autores que administra. De acuerdo a ello, se presume que la sociedad de gestión colectiva cuenta con la autorización de los autores que dice representar para iniciar las acciones administrativas y judiciales que sean necesarias para la defensa de los derechos de autor”.

“Asimismo, en caso de autores extranjeros, para la aplicación de esta presunción a favor de la sociedad de gestión colectiva nacional, sólo es necesaria la existencia de un contrato de representación entre dicha sociedad con la sociedad de gestión colectiva del país del cual proviene el autor, contratos de representación que, a fin de surtir efectos frente a terceros, deberán ser inscritos por la sociedad de gestión colectiva en la oficina nacional competente”.

“Sin embargo, esta presunción admite prueba en contrario. En tal sentido, para que no se aplique la presunción, se debe demostrar que la sociedad no representa al autor de la obra o probar que dicho autor no se encuentra adscrito a la sociedad de gestión colectiva extranjera con la cual la sociedad de gestión colectiva nacional tiene el contrato de representación, entre otros supuestos”.

“En tal sentido, el hecho de que, según lo manifestado por las denunciantes, en la página web de la denunciada no se consigne el repertorio extranjero que administra la denunciada no desvirtúa el hecho de que éste sí pueda estar sometido a su administración, ya que no se ha acreditado que la denunciada APDAYC se haya negado a brindar dicha información, tal como lo establece el artículo 147 del Decreto Legislativo 822 que señala que las sociedades deberán tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por

ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos, nacionales y extranjeros que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas asociaciones, precisando que cualquier otra forma de consulta se realizará con gastos a cargo del que la solicite”.

COMENTARIO: Existe una constante jurisprudencial en considerar que se presume la representación del repertorio por parte de la entidad de gestión colectiva que actúa en defensa de las obras, interpretaciones o ejecuciones o producciones respecto de las cuales ejerce su defensa, correspondiendo la carga de la prueba al accionado que alegue la falta de uso de ese repertorio o de su representación por la entidad accionante. En ese sentido Delgado Porras apunta que “... *con dicha finalidad se les reconoce «legitimación» para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales «en los términos que resulten de sus propios estatutos» ... relevándolas, de esta manera, de la carga de la prueba (absolutamente imposible en la práctica de la gestión, cuando de utilizaciones masivas se trata -discotecas, emisoras de radiodifusión, videos comunitarios, distribuidores-cable, copisterías, etc.) de los titulares por cuenta de quienes actúe, cuya prueba deberá aportar el que la niegue*”¹. De otro lado, como contrapartida a la obligación que tienen de pagar las remuneraciones correspondientes, los usuarios de las obras, interpretaciones o producciones administradas por una entidad de gestión, deben estar en capacidad de acceder a la información sobre las tarifas y el repertorio correspondiente a esos aranceles. De allí la tendencia legislativa de imponer a las entidades de gestión el deber de “... *tener a disposición de los usuarios, en los soportes utilizados por ellas en sus actividades de gestión, las tarifas y el repertorio de los titulares de derechos nacionales y extranjeros, que administren, a efectos de su consulta en las dependencias centrales de dichas asociaciones*” o mediante alguna otra fórmula equivalente. © Ricardo Antequera Parilli, 2012.

¹ DELGADO PORRAS, Antonio: *Panorámica de la protección civil y penal en materia de Propiedad Intelectual*. Ed. Civitas. Madrid, 1988, pp. 105-106.